

**LEY Nº 2.532/05**

**QUE ESTABLECE LA ZONA DE SEGURIDAD FRONTERIZA DE LA  
REPUBLICA DEL PARAGUAY.**

**EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA  
DE  
LEY**

**Artículo 1º.-** Se establece zona de seguridad fronteriza la franja de 50 kilómetros adyacente a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio nacional.

**Artículo 2º.-** Salvo autorización por decreto del Poder Ejecutivo, fundada en razones de interés público, como aquellas actividades que generan ocupación de mano de obra en la zona de seguridad fronteriza, los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la República o las personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la República, no podrán ser propietarios, condóminos o usufructuarios de inmuebles rurales.

*Modificado por el artículo 1º de la Ley Nº 2.647/05*

**Artículo 3º.-** Las disposiciones del Artículo 2º de la presente Ley no afectarán los derechos adquiridos antes de la vigencia de esta Ley.

**Artículo 4º.-** Serán nominativas y no endosables las acciones o títulos de las sociedades por acciones y los certificados de aportación de las cooperativas de aquéllos que pretenden ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza.

**Artículo 5º.-** Los notarios públicos no podrán elevar a escrituras públicas negocios jurídicos no autorizados por la disposición del Artículo 2º de la presente Ley.

**Artículo 6º.-** Se encomienda al Ministerio de Defensa Nacional la realización ante el Servicio Nacional de Catastro, de las diligencias necesarias para el establecimiento de la Zona de Seguridad Fronteriza, debiendo inventariar las condiciones de los inmuebles rurales actualmente existentes.

**Artículo 7º.-** Las certificaciones expedidas por el Servicio Nacional de Catastro deberán dejar constancia de que el inmueble en cuestión se encuentra ubicado total o parcialmente en la Zona De Seguridad Fronteriza.

**Artículo 8º.-** Los actos jurídicos que contraríen lo dispuesto en esta Ley, serán nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderles a los jueces, funcionarios y a los notarios públicos intervinientes.